

Santiago, diez de junio dos mil veinticinco.

Al escrito folio 26: téngase presente.

**Vistos y teniendo presente:**

**Primero:** Que don Jorge Pineda Jiménez, abogado, en representación de la reclamante, en autos RIT I-55-2025, RUC 2540640918-2, caratulados “Universidad de Artes Ciencias y Comunicación-UNIACC con Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente”, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, dedujo recurso de queja en contra de los integrantes de la Corte de Apelaciones de la misma ciudad, ministra señora Graciela Gómez Quitral, ministra suplente señora Paola Díaz Urtubia y abogada integrante señora Magaly Correa Farías, por cuanto dictaron, con falta o abuso grave, la resolución de ocho de abril de dos mil veinticinco, que confirmó la de primera instancia que declaró la incompetencia de la judicatura laboral para conocer la reclamación que interpuso.

Refiere que las juezas incurrieron en una falta o abuso grave al confirmar la resolución de primer grado que desconoce la competencia que se le otorga a la judicatura laboral para conocer y resolver la reclamación interpuesta, de acuerdo al artículo 503 y 420 letra e) del Código del Trabajo, toda vez que se trata de un acto administrativo terminal sancionatorio, por lo que está dentro de la competencia genérica que la ley le asigna a los tribunales del trabajo, sin embargo, se decidió que al haber terminado el procedimiento con una mediación, aún sería posible la interposición de los recursos previstos en la Ley N° 19.880, con lo que su representada quedó en la indefensión, toda vez que la existencia de mediación no convierte al acto recurrido en uno de mero trámite y dado que los recursos establecidos en la Ley N° 19.880 los conoce el mismo órgano recurrido

Agrega que con lo resuelto se vulnera el principio de inexcusabilidad y el acceso a un justo y racional procedimiento que exige el establecimiento de un sistema recursivo para la revisión de lo resuelto, toda vez que los actos administrativos que dicte la Dirección del Trabajo, en el marco de la Ley N° 21.643, no pueden estar exentos de revisión judicial, ya que quedaría al arbitrio de la autoridad el ejercicio de su poder sancionatorio, situación similar a la que se produjo, en su oportunidad, con el procedimiento sobre tutela laboral respecto de funcionarios públicos.

Solicita se acoja el recurso, y, por consiguiente, se deje sin efecto la resolución dictada con falta o abuso grave, y se dicte en su reemplazo una que



disponga que se le de curso al reclamo para su conocimiento ante juez no inhabilitado.

**Segundo:** Que, al evacuar el informe de rigor, las recurridas afirman que efectivamente confirmaron la resolución apelada dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por la cual se declaró incompetente para conocer del reclamo de legalidad que interpuso la quejosa respecto de resolución dictada por la Dirección Regional del Trabajo Santiago Oriente, emitida en el marco del procedimiento regulado por la Ley N° 21.643, al estimar que de acuerdo al principio de legalidad y reserva legal, solo aquellas actuaciones expresamente habilitadas por el legislador pueden ser objeto de revisión por la judicatura laboral, y la dictada en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 D del Código del Trabajo, no contempla una vía recursiva ante la judicatura laboral, sin perjuicio de las vías previstas en la Ley N° 19.880. Y se tuvo presente, además, que el acto administrativo cuestionado no reviste el carácter de resolución terminal exigido por el artículo 420 letra e) del Código del Trabajo, pues se trata de un pronunciamiento emitido en el marco de una investigación por acoso laboral llevada a cabo por la Inspección del Trabajo, cuyo objeto es habilitar la mediación obligatoria, que no implica por sí sola una controversia judicial inmediata, al no haberse agotado la instancia de resolución voluntaria del conflicto, interpretación que se ajusta a una lectura sistemática y razonable del marco normativo vigente, con respeto de los principio de legalidad, competencia y control jurisdiccional conforme a derecho, por lo que estiman que no han incurrido en falta o abuso grave, y menos una, que amerite su corrección por vía disciplinaria.

**Tercero:** Que el arbitrio procesal interpuesto se contiene en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata “De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales”, y está reglamentado en su párrafo primero, que lleva el epígrafe de “Las facultades disciplinarias”. Sobre el particular, el inciso primero de su artículo 545 dispone: *“El recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional. Sólo procederá cuando la falta o abuso se cometa en sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación o definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario, sin perjuicio de la atribución de la Corte Suprema para actuar de oficio en ejercicio de sus facultades disciplinarias. Se exceptúan las sentencias definitivas de primera o única instancia dictadas por*



*árbitros arbitradores, en cuyo caso procederá el recurso de queja, además del recurso de casación en la forma”.*

**Cuarto:** Que, en consecuencia, para dar lugar a tal arbitrio, resulta necesario que el tribunal dicte una resolución cometiendo falta o abuso grave, esto es, de mucha entidad o importancia, único contexto que, *prima facie*, autoriza la aplicación de una sanción disciplinaria a los recurridos, de ser acogido.

Según la doctrina, de esta forma “...se recoge el interés del Ejecutivo y de la Suprema de limitar su procedencia (sólo para abusos o faltas graves), poniendo fin a la utilización del recurso de queja para combatir el simple error judicial y las diferencias de criterio jurídico...” (José Miguel Barahona Avendaño, “El Recurso de Queja. Una Interpretación Funcional”, p. 40).

En dicho contexto, resulta relevante considerar que el concepto que introduce el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, al disponer que el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir “faltas o abusos graves” cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional, está íntimamente relacionado con el principio elaborado por la doctrina procesal de la “trascendencia”, que, en el caso concreto, dice relación con la necesidad de que la falta o abuso que se denuncia, tenga una influencia sustancial en la parte dispositiva de la sentencia.

**Quinto:** Que esta Corte ha precisado por la vía jurisprudencial los casos en que se está en presencia de una falta o abuso grave al consignar que se configura, entre otros, cuando se incurre en una falsa apreciación del mérito del proceso, circunstancia que se presenta cuando se dicta una resolución judicial de manera arbitraria, por valorarse de forma errónea los antecedentes recabados en las etapas respectivas (Mario Mosquera Ruiz y Cristián Maturana Miquel, “Los recursos procesales”, p. 387).

Se trata, por tanto, de un recurso extraordinario que procede en los casos descritos, que persigue modificar, enmendar o invalidar un fallo o resoluciones pronunciadas con falta o abuso, destinado a corregir la arbitrariedad judicial, mediante la imposición de medidas disciplinarias a los recurridos ante la existencia de un perjuicio que afecte al recurrente, manifestado en un error grave y notorio de hecho o de derecho (Alejandro Romero Seguel, en “Curso de Derecho Procesal Civil”, t. V, p. 342).

**Sexto:** Que, por regla general, los actos que dicte la administración están sujetos al control de la jurisdicción, que queda radicado en los tribunales ordinarios,



excepto en aquellos casos que la legislación establezca un mecanismo específico de impugnación, hipótesis en que el órgano o juzgado designado será competente para conocer y resolver el asunto correspondiente por especialidad.

**Séptimo:** Que, en tal sentido, el Código del Trabajo establece una serie de mecanismos de reclamación en contra de resoluciones de la Administración en normas aisladas y en forma más sistematizada en sus artículos 503, 504 y 512, permitiéndose la impugnación judicial, por ejemplo, en los casos reglados en los artículos 183-I, 183-K, 183-L, 183-M, 233, 340, 354, 377, 402 y en los tres antes referidos, que reglan la acción que se deduzca contra la resolución que se pronuncie sobre la imposición de una multa o su reconsideración.

De lo anterior, se desprende que la legislación decidió asignar el conocimiento de determinados asuntos en los que interviene la Administración a los tribunales especializados en materia laboral, esto es, respecto de los cuales expresamente se confiera tal facultad, que no es el caso del cuestionado en la especie, en cuanto se trata de un informe jurídico que se emite en virtud del mérito de la investigación efectuada por la Inspección del Trabajo por una denuncia sobre acoso laboral, y que dispone la remisión de los antecedentes a la unidad correspondiente para citar a las partes a mediación legal.

**Octavo:** Que, sólo a modo de precisión y a mayor abundamiento, la disposición que se advierte ausente para compartir la posición de la recurrente reviste el carácter de “regla secundaria de adjudicación”, que son las que permiten identificar a los individuos que pueden juzgar y entregan el procedimiento a seguir, que además definen conceptos como los de juez, tribunal, competencia, jurisdicción y sentencia, y que, en último término, recurren a la “regla primaria” conforme a la cual la controversia será dilucidada; pero es claro en el caso que se analiza, que aquel mandato necesario para atribuir a la judicatura laboral legitimidad para resolver el asunto de que se trata, no se encuentra presente, de lo que se desprende que todo intento por asignarle la potestad de resolver la validez de la resolución atacada resulta improcedente. (vid. H. L. A. Hart, “El Concepto de Derecho”, AbeledoPerrot, año 2012, pp. 120 y 121).

**Noveno:** Que, de lo expuesto, se concluye que aunque la legislación laboral instituyó en diversas normas la posibilidad de recurrir respecto de una resolución pronunciada por la Dirección del Trabajo, estableciendo incluso con claridad el plazo en que será admisible la reclamación respectiva y el tribunal competente, se permite la actuación judicial especializada sólo en aquellos casos en que expresamente se



ha previsto la correlativa acción, materias a las que se refiere la legislación como aquellas “que la ley entrega al conocimiento de los juzgados de letras con competencia en materia del trabajo” y a las “que procedan” en su artículo 420 letras b) y e), por lo que no se advierte un error en la determinación del alcance de estas disposiciones, como se denuncia, desprendiéndose que la judicatura laboral puede conocer únicamente de aquellos asuntos que por ley se entregan a su resolución en forma expresa.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, **se rechaza** el recurso de queja deducido por don Jorge Pineda Jiménez en contra de las integrantes de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Se **previene** que la **ministra señora Gajardo** concurre a la decisión, teniendo únicamente presente el argumento señalado por las recurridas, en el sentido que, en la especie, se trata de un acto no terminal, respecto del cual se encuentra pendiente la etapa de mediación obligatoria, fase esencial del procedimiento para dar por terminada la sede administrativa.

Regístrese, agréguese copia autorizada de esta resolución a la carpeta digital y hecho, archívese.

N°12.145-2025.





Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Gloria Chevesich R., Andrea Maria Muñoz S., Maria Gajardo H., Mireya Eugenia Lopez M. y Abogada Integrante Irene Eugenia Rojas M. Santiago, diez de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a diez de junio de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

